

REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA

ACTA CONTINUACIÓN AUDIENCIA INICIAL

En Bogotá D.C., a las dos y treinta de la tarde (102:30 p.m.), del veinte (20) de enero de dos mil veinte (2020), yo Guillermo Navedo Paredes, Juez Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, declaro abierta la audiencia inicial, dentro del proceso iniciado por el señor Otto Daniel Gutiérrez Bolívar contra la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores, de radicado 110013335 009 2018 00200 00.

**1.- Asistentes**

1.1. **Gabriela Patricia Parra Roa** identificada con c.c. 1.020.804.424 de Bogotá D.C. y T.P. 334.978, a quien se le reconoce personería para actuar como apoderada sustituta de la parte demandante.

1.2. **Maria del Pilar Salcedo Diaz** identificada con c.c. 32.729.327 de Barranquilla - Atlántico y T.P. 98.322, quien viene reconocida en estas diligencias como apoderada de la parte demandante.

**2.- Cuestión previa**

Los días 13 de agosto y 7 de octubre de 2019, se desarrolló la primera audiencia inicial, suspendida por el juzgado de orden presenciales documentales o fin de resolver las excepciones propuestas por la demandada, cumplido lo cual corresponde indicar la continuidad a pesar de las excepciones.

**3.- Excepciones**

3.1. La entidad accionada, conforme la demanda y acuerdo como excepciones de mérito la inexistencia del fundamento para pedir reliquidación de cesantías y aparte a pesar de la ineffectividad de la Constitución de 1991, la imposibilidad de obrar oposición a la Ley 100 de 1993, pago, cobro de lo no debido, temeridad y mala fe y la excepción genérica que corresponde desatar en la sentencia que prima en el proceso.

3.2. También propuso las excepciones de inepta demanda prescriptiva extintiva del derecho para reclamar la reliquidación de las cesantías

Entidad demandada: Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) (en la demanda se menciona como demandado).  
Referencia: 11000-2018-0018-00200-0  
Demandante: Mtro. Horacio Gómez Carrasco  
Demandado: Mtro. M. Alfonso Martínez de Ibarra. Minrex (en la demanda).

Caso juzgado con respecto al reajuste en los aportes a pensión. Para resolver ciertas excepciones, el Despacho señala lo siguiente:

### 3.2.1. Inepta demanda

3.2.1. La entidad demandada argumentó la ineptitud de la demanda, en razón a que el acto administrativo demandado es un acto de trámite informativo, por medio del cual se dio sustento jurídico en la forma como se liquidaron las cesantías, aportes a pensión y demás pretensiones del actor. Por otra parte, señaló que existía indebida acumulación de pretensiones, en especifico por la exclusión entre si de las pretensiones tercera y cuarta, porque en una salvo intereses moratorios y en la otra indexación de la condena.

3.2.2. El Despacho advierte que el acto administrativo demandado S-DIN-17-098562 del 6 de diciembre de 2017 expedido por la Directora de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, resuelve de manera negativa la pretensión de pago y reajuste de las acreencias laborales por concepto de aportes a pensión y cesantías con base al salario reglamento devengado durante el tiempo que prestó sus servicios, así (fls. 66 a 68).

«Por la anterior razón, no es posible atender su petición de reliquidar dichos aportes conforme al salario realmente devengado en divitos pues en este caso no era con base en salario del trabajador que se realizaban los pagos a la Caja de Previsión respectiva, sino de acuerdo a los porcentajes establecidos en la normativa».

3.2.3. Por otra parte, mediante Oficio SGPS-19-038410 de 21 de agosto de 2019, de la Directora de Talento humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con destino al proceso, informó que revisada la historia laboral del demandante «no reposa resolución y acta de liquidación de cesantías ni prestaciones sociales finalizada la vinculación del señor en mención con el Ministerio» (fl. 215).

3.2.4. Ahora bien, en los casos en los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores no notifica a la parte deuda las liquidaciones oíntimas de los cesantías, restringe la oportunidad de iniciar los mecanismos de impugnación respecto del salario base que tuvo en cuenta para el reconocimiento prestacional, pero habilitar la posibilidad de demandar en procura de encontrar una solución a la hipótesis de ser detectuosa la liquidación de sus cesantías.

3.2.5. De igual manera, es preciso indicar, que si bien las prestaciones sociales del personal del servicio exterior con las previsiones temporales analizadas de conformidad con la sentencia de constitucionalidad C-535

de 2005). Debido a liquidarla anteriormente en su momento (Aquellos que no se han cumplido o se han cumplido parcialmente) y la liquidación efectivamente devengada, no puede pensarse de vista que cuando se produce el cierre del servicio del empleado tales cobroimientos se convierten en definitivos. Y en tal sentido son prescriptibles al no presentarlos dentro del término previsto en la ley, situación que se ejemplifica más adelante.

3.2.6. En ese orden de ideas, el único acto administrativo con el que cuenta el señor Gutiérrez Bolívar para demandar el pago de los aportes a pensiones y las cesantías, es el acto aquí demandado, pues de otra forma es el que le resuelve de fondo una situación jurídica, evidente una manifestación de voluntad de la administración y es susceptible de ser demandado ante esta jurisdicción.

3.2.7. Es por ello, el demandante al momento de presentar la demanda de liquidación y restablecimiento del derecho todavía contaba con la oportunidad de ejercer el derecho de acción, derecho no condicionado por la ocurrencia o no de la prescripción del derecho.

3.2.8. Por otra parte, frente a la indebida acumulación de pretensiones por solicitar en una el pago de intereses moratorios y en la otra la indexación de la condena, se advierte que dichas pretensiones no se excluyen entre sí, por lo que declarara no probada la excepción de inepta demanda.

### **3.2.2. Prescripción extintiva del derecho para reclamar la liquidación de las cesantías**

3.2.2.1. La demandada solicitó declarar la prescripción del derecho a reclamar la liquidación de las cesantías, por haber transcurrido más de 3 años, desde su desvinculación -31 de diciembre de 1991- a la fecha de reclamación 31 de octubre de 2017.

3.2.2.2. Frente a la anterior pretensión, el demandante manifestó que el acto administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías nunca le fue notificado, por lo que imposibilita contar el término de prescripción final, debido a que sólo hasta el 6 de diciembre de 2017 con la expedición del acto demandado, tuvo conocimiento de la liquidación indebida de las cesantías.

Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Liviño: "I. I Para lo Corte, como se ha visto, ese tratamiento [diferenciado] no está justificado pues implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho y del principio de primaria de la realidad en las relaciones laborales. Principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde. Esta concepción, desde luego, no se opone a que frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos- impuestos por la ley- pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en pensiones".

**Referência: 1.º Juiz de Direito - 2018-00200-00**  
**Demandante: Doutor Luís Augusto Pacheco da Silva et al.**  
**Demandado: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) S/A**

3.2.2.3. De conformidad con lo anterior, al Despacho 19, correspondiente diligencia se pondrá en la excepción de prescripción del derecho de la resarcición de los daños sufridos por el demandante, así:

3.2.2.4 De los pocos que obran en el proceso se infiere que el demandante prestó servicios en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 17 de abril de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1991, en el cargo de Vicecónsul. Grado Clasificación: P-Ex del Código General de Colombia en Hamburgo (II-63), y el monto del auxilio de cesantía reportado por el Coordinador de Remuneración y Prestaciones Sociales (II-83).

3.2.2.5. Durante todo ese tiempo, tuvo derecho a que su empleador le recaudara, liquidara y pagara el auxilio de cesantía, que, según los formatos de los años 1985-1991 fueron liquidadas, sin notificación alguna (fls. 75 a 81), solo existen documentos (extracto histórico) del Fondo Nacional del Ahorro (fl. 82) y orden de pago, que revelan lo concerniente a su consignación y retiro total por parte del demandante (fl. 227).

3.2.3.6. De acuerdo con el anterior extracto, el demandante el 10 de mayo de 1992, después de haberse desvinculado del Ministerio de Relaciones Exteriores (31 de diciembre de 1991), retiró las cesantías definitivas por un valor de \$620,050, que había contraído con el Fondo Nacional del Ahorro, según el estado de cuenta de 11 de septiembre de 2017.

3.2.2.7. Es en esa fecha cuando el demandante tuvo certeza de lo que había decidido el empleador, constituye la conclusión de todo el proceso relacionado con la prestación, se consolida todo, desde la orden de pago y sus condiciones, con su cumplimiento o **EJECUCIÓN** con la consignación en el FNA y, adicionalmente, el beneficiario recibió el dinero. Lo anterior permite inferir que tuvo el conocimiento sobre el monto de sus cesantías definitivas al realizar el retiro total.

Pese a lo anterior, el demandante manifiesto que el acto administrativo de reconocimiento y pago de los cesantías nunca le fue notificado, por lo que, a su juicio, se imposibilitó contar el término de prescripción interenal, porque sólo el 6 de diciembre de 2017 con la expedición del acto demandado, tuvo conocimiento de la liquidación indebida de los cesantías.

3.2.2.8. Con ocasión de la declaración de inexistencia de la constitucionalidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992 (sobre el pago de las prestaciones sociales del servicio exterior con la asignación del cargo equivalente en planta interna), mediante la Sentencia C-535 de 2005 de la Corte Constitucional.

Decreto 10 de 1992, artículo 57. «Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, la excepción de las administrativas locales, se liquidarán y se pagarán con base en las dignidades del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores».

Número de registro de inventario del trámite por la continuación o liquidación de cesantías  
Referencia: 11601-31-00007-2018-0-1200-00  
Demandante: Oficina Trámites Oficiales 1-1-2018  
Demandada: Secretaría de Relaciones Exteriores

el demandante solicitó del Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 31 de octubre de 2017 (fls. 64 a 68), la liquidación de sus cesantías con el verdadero salario que él tenía permitido en el ejercicio de su cargo. Dicha petición fue contestada de manera negativa mediante Oficio S-DITH-17-098562 del 6 de diciembre de 2017.

3.2.2.9. Por otra parte, el auxilio de cesantías definitivas tiene la finalidad de que el empleado obtenga sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar mientras tenga un vínculo laboral de modo que ese último constituido por las consignaciones que anualmente deba efectuar la entidad empleadora serán **pagados al momento del retiro del servicio**.

3.2.2.10. El Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha considerado que el auxilio de cesantías es una prestación periódica, mientras se encuentre vigente la relación legal y reglamentaria, toda vez que la naturaleza unitaria del amontonamiento se da una vez ha culminado el vínculo laboral, cuando se convierte en "definitiva". **Las cesantías no constituyen una prestación periódica**, aunque si se causan por períodos, cuya liquidación adquiere el carácter de definitivo, a partir del momento en que el empleado queda cesante y surge para el empleador la obligación de reconocerla a través de un acto administrativo y pagarla al titular.<sup>14</sup>

3.2.2.11. De conformidad con lo anteriormente expuesto, al haberse producido el retiro del accionante, el 31 de diciembre de 1991, el acto de liquidación de sus cesantías definitivas se le debió notificar para que pudiera conocer su contenido completo e inferirsierra, si era del caso, los

<sup>14</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección 8, C.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez, Autos informáticos de sala del 18 de mayo de 2017, Rad. 25000-23-42-000-2017-00765-01(1188-18), y el 2<sup>o</sup> de marzo de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2017-00765-01(1188-18).

En el mismo sentido, de la Subsección A, providencias doff. 11 de diciembre de 2017, rad. 90001-23-33-000-2015-00505-01(3119-17); C.P. William Hernández Gómez, y el 21 de febrero de 2019, rad. 25000-23-42-000-2016-05558-01(3501-17); C.P. William Hernández Gómez, y el 16 de diciembre de 2018, rad. 25000-23-42-000-2016-04160-01(4110-17) y 25000-23-42-000-2016-04146-01(4257-17); C.P. Rafoel Francisco Suárez Varela, y el 26 de noviembre de 2018, rad. 25000-23-42-000-2013-00268-01(3247-16); C.P. William Hernández Gómez, y el 4 de septiembre de 2017, rad. 78001-23-33-000-2014-01478-01(3131-14); C.P. William Hernández Gómez.

\* Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sesión del 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-31085-05159-01 (10230-08); C.P. Gustavo Arenas Monsalve,

† Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección 8, Autos de 30 de julio de 2019, Rad./ 25000-23-42-000-2017-03858-01 (5885-2018); C.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

En el presente caso, sin embargo, en el material probatorio tecnificado no se evidencia dicha notificación. De ahí surge la cuestión para determinar desde qué momento se realiza el cierre o punto de los términos procesales, con el fin de establecer la prescripción del derecho.

3.2.2.11. De lo que precede se colige que el actor, desde el retiro definitivo de las cesantías el 10 de mayo de 1992, podía hacer la reclamación que consideró pertinente, máxime que en los términos de ley la ejecución también es un hecho que permite iniciar el conteo de los plazos de ley.

3.2.2.12. El artículo 136 del Decreto 01 de 1984, código vigente para la época de desvinculación del demandante, sobre caducidad de las acciones, prevé:

«2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto según el caso».

De manera que al consignar las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro la entidad cumplió el acto administrativo, lo que en derecho se denomina **ejecución del acto**, que si conoció el demandante cuando retiró los dineros de aquella entidad, es decir, no puede alegar con vocación de prosperidad el desconocimiento, por la falta de notificación, cuando recibió los dineros que se ordenó cancelar por el concepto que reclama los recibió efectivamente el 10 de mayo de 1992.

3.2.2.13. Asimismo, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, en el artículo 102 preceptúa:

«Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».

3.2.2.14. Por lo visto, el término prescriptivo ha de contabilizarse a partir del momento en que el derecho se hace exigible, de lo cual se puede colegir que respecto de la liquidación de las cesantías, aquello debe contarse desde la notificación de su acto liquidatorio durante la vinculación laboral sin embargo, si la Administración omitió su debida notificación, dicho fenómeno no será oponible al interesado; en la medida en que no tuvo la oportunidad de conocer el monto de sus cesantías y controvertirla.

Fuente: Despacho de Consultoría y Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores  
Referencia: 0000-23-25-000-2010-01216-01  
Demandante: Otto Daniel Gutiérrez Bolívar  
Demandada: Oficina de Gestión de Recursos Humanos

notaría es para su cobro (Ils. 13). El concepto de **sentencia final** o **decreto**, alusion a lo **intencionalidad** de la sentencia o al **estatuto permitirán** tenerla en cuenta, pero, en su caso, no la **licitad** jurisdiccional, se los **opera** **el momento de la liquidación** establecida en la **sentencia** y que entre las **decisiones** son la **plenitud** de las **formas propias** de **justicia**. Por el contrario, la **licitud** considera la **posibilidad** de **valer** sobre una **decisión** adoptada **en una** **previdencia** que **hubiere quedado ejecutada**, en los **eventos** en que la **ley** la **haya autorizado expresamente**<sup>7</sup>.

3.2.3.2. En efecto, en el caso concreto, como se dejó expuesta debe recordarse que el señor Otto Daniel Gutiérrez Bolívar, en oportunidad precedente y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acudió a esta jurisdicción con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio DTR 48341 del 6 de julio de 2010 expedido por la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se negó la solicitud de pagar las cotizaciones a favor del actor a CAJANAL – EICE, con base en los salarios realmente devengados durante el tiempo laborado en la planta externa con fundamento en sentencia C-535 de 2005 y los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

3.2.3.3. En efecto, El Despacho evidenció que esta jurisdicción resolvió el precedido asunto; en primera instancia, mediante sentencia del 1 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, bajo el radicado 2010-01216-01, magistrado ponente Ivar Nelson Arevalo Perico, en la que declaró la nulidad del Oficio DTR 48341 y condenó al Ministerio de Relaciones Exteriores cancelar a favor de la Caja Nacional de Previsiones Social EICE en liquidación, o a la entidad que haga sus veces o asuma sus obligaciones, las diferencias sobre los aportes no efectuados en el año inmediatamente anterior al retiro del servicio del demandante en proporción que le corresponda (Ils.89 a 114).

3.2.3.4. Apelada la anterior decisión, esta fue confirmado mediante sentencia del 30 de agosto de 2012, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Consejero Ponente Víctor Hernando Álvarez Ardila, radicado 25000-23-25-000-2010-01216-01 (Ils.115 a 139).

3.2.3.5. Así las cosas, El Despacho considera que el asunto que ahora se debate con respecto al reconocimiento y pago del reajuste de los aportes a pensión con base en los salarios realmente devengados durante el tiempo que laboró en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, **existe identidad de partes**, puesto que el aquí demandante Otto

<sup>7</sup> Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia del 28 de enero del 2009, expediente 34-239 C.P. Mauricio Roigedo Gómez y sentencia del 27 de mayo de 2015, expediente 33-819 C.P. Hernán Andrade Rincón.

En el caso de que la cosa juzgada sea una sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso contencioso, tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes lo que niegue la validez medida producida cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa pendiente juzgada (...) La sentencia proferida en procesos de establecimiento del derecho o protección a quién hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. Las sentencias ejecutadas serán obligatorias y quedarán sometidas a la formalidad del registro que ocurra con la ley".

El art. 2º, apartado 2º, establece que las cosas juzgadas que surgen en los procedimientos de conciliación y arbitraje tienen fuerza de cosa juzgada, lo que implica que las sentencias que surgen de estos procedimientos tienen fuerza de cosa juzgada de acuerdo a lo establecido en el art. 2º, apartado 1º, que establece que las sentencias que surgen de los procedimientos de conciliación y arbitraje tienen fuerza de cosa juzgada en el mismo sentido que las sentencias que surgen en los procedimientos de conciliación y arbitraje que surgen en el marco de la legislación de conciliación y arbitraje.

El art. 2º, apartado 3º, establece que las cosas juzgadas que surgen en los procedimientos de conciliación y arbitraje tienen fuerza de cosa juzgada en el mismo sentido que las sentencias que surgen en los procedimientos de conciliación y arbitraje que surgen en el marco de la legislación de conciliación y arbitraje.

El art. 2º, apartado 4º, establece que las cosas juzgadas que surgen en los procedimientos de conciliación y arbitraje tienen fuerza de cosa juzgada en el mismo sentido que las sentencias que surgen en los procedimientos de conciliación y arbitraje que surgen en el marco de la legislación de conciliación y arbitraje.

El art. 2º, apartado 5º, establece que las cosas juzgadas que surgen en los procedimientos de conciliación y arbitraje tienen fuerza de cosa juzgada en el mismo sentido que las sentencias que surgen en los procedimientos de conciliación y arbitraje que surgen en el marco de la legislación de conciliación y arbitraje.

### 3.2.3. Cosa juzgada con respecto al reajuste en los aportes a pensión

3.2.3.1. La cosa juzgada corresponde al atributo en virtud del cual las autoridades que dictan de fondo una controversia, una vez ejecutadas, definen el carácter de inmutables y definitivas, por manera que los asuntos definidos por su intermedio no son susceptibles de ser ventilados en un nuevo proceso, en los cuales se consideren los elementos formales y

procedimentales que se han cumplido en el anterior.

Corte de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Acta de 5 de octubre de 2017. Of.: Carmelo Paredes Cuarter. Expediente: 25000-03-42-080-2012-000064-01 (2725-2013).

"Al respecto, el artículo 293 del Código General del Proceso señala: "La sentencia ejecutada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso venga sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (...)"

Por su parte, el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: "La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes lo que niegue la validez medida producida cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa pendiente juzgada (...). La sentencia proferida en procesos de establecimiento del derecho o protección a quién hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. Las sentencias ejecutadas serán obligatorias y quedarán sometidas a la formalidad del registro que ocurra con la ley".

<sup>1</sup>See also the discussion of the relationship between the two concepts in the section on "Theoretical framework".

**Parvovirus** can cause aplastic crisis in patients with chronic hemolytic anemia.

10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*

Daniel Gómez Bolívar fungió también como parte civil en la demanda judicial contra el demandado Ministerio de Relaciones Exteriores, los dos demandados tienen el mismo objeto, pues ambos se proponen el rescate y pago de los apóstoles presos; y por último dichas personas tienen la misma causa, pues en los dos se entiende la nulidad del acto administrativo, en base a la sentencia de constitucionalidad C-4335 de 2005, que declaró inconstitucional el artículo 37 del Decreto 10 del 1992 en su totalidad referido a la liquidación de prestaciones semejantes de los funcionarios del servicio exterior del Ministerio con fundamento en los salones de verificación por quienes desempeñaban obligos equivalentes en plazo inferior, resaltando la inviolabilidad jurídica de las peticiones formadas en el ordenamiento jurídico que permitían dichas designaciones.

3.2.3.6. Por consiguiente, dicha supuesta configuración es falsa y fundada material; circunstancia por la que habría de ser declarado, pues no es posible volver sobre la decisión ya adoptada en esa providencia, dentro de un proceso con identidad de causa pendiente y fundamentos de derecho.

3.2.6.7. Por ultimo, para el despacho resulta necesario precisar que, si bien en el sub examine se declarara configurada la cosa juzgada, pues tal decisión frente al caso concreto obedece a la aplicación de los principios de economía y eficacia que rigen el desarrollo del proceso judicial, en tanto el juez puede advertida en cualquier etapa del proceso, tal y como aquí sucedió.

En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE:

**PRIMERO: DECLARAR** no probada la excepción de inepta demanda

**SEGUNDO: DECLARAR probadas las excepciones de caducidad del medio de control, de prescripción extintiva del derecho para reclamar la reliquidación de las cesantías y cosa juzgada con respecto al reajuste en los aportes a pensión, de conformidad con lo expuesto en la parte motivativa de esta providencia.**

**TERCERO:** Dar por terminado el proceso del señor Otto Daniel Gutiérrez Bolívar, en atención a lo previsto en el inciso 3 numeral 6 del artículo 180 del CPACA.

These four S. grisebachii were collected from the same locality as the last two, but were taken at different times. They were all collected in the same month, but the first three were taken in the afternoon, and the last one in the evening.

**CUARTO.** Una vez que todo haya quedado archivado se procederá a organizar el informe correspondiente.

En la actualidad se considera que el desarrollo de las ciencias y la cultura es un factor fundamental para el progreso de una nación.

Die ersten Ergebnisse der geplanten Studie im November 2010 werden im Herbst 2011 veröffentlicht.

Antes de finalizar se señalará que se habrá quedado abundantemente grabado el escudo que hoy se pone en la presente acta.

Se termina esta audiencia siendo las 3:00 p.m. y se firma el acta por  
quienes en ella intervinieron.

**CHIUSINO ROVERA FERRONE**

1003

GABRIELA FONSECA ESSA EDA

Apaga esta sección, da la parte siguiente.

MARIA DEL PILAR SANCHEZ PIAT

**APRENDIZAJE DE LA PRACTICA**

Al final de la parte demandada